

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Honduras

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Molina Chocano, Guillermo
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-06-23 05:01:49
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/220266

Honduras. ¿Del ajuste neoliberal al liberalismo social?

Molina-Chocano, Guillermo

Guillermo Molina Chocano: Sociólogo hondureño con postgrado en Ciencias Políticas e Investigación sobre América Latina; profesor investigador de la Maestría Latinoamericana de Trabajo Social (MLATS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; director del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (CE-PROD) y profesor visitante de la Universidad Libre de Berlín y de la Florida International University (FIU).

En la actual situación que vive el país, es definitivamente el proceso electoral el eje principal de la dinámica política de Honduras, habida cuenta de que el próximo 28 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales, en todo el país y abarcando la totalidad de cargos de elección popular. Se trata de la quinta elección constitucional sucesiva, a partir de 1980 y de la escogencia ininterrumpida del cuarto mandatario que regirá el próximo Gobierno de la República para el período 1994-1998; sin duda esto indica una significativa consolidación del régimen democrático en Honduras y un importante grado de estabilidad institucional, que se proyecta hacia el fin de siglo.

Por otra parte, y si las encuestas de opinión confirman la tendencia que favorece al partido de oposición con un margen no menor del 10%, con inclinación a un incremento en la recta final de la campaña, se trataría de un nuevo fenómeno de alternabilidad entre los dos grandes partidos tradicionales del país: el Partido Nacional en el gobierno, del presidente Rafael Leonardo Callejas, y el Partido Liberal ubicado en la oposición. Como se recordará, el presidente Callejas ganó las elecciones anteriores, luego de dos períodos consecutivos de gobiernos liberales. Ahora, aparentemente, la tendencia se invertiría y existen altas probabilidades de contar con un nuevo triunfo liberal.

Los términos de la contienda

En general, la campaña electoral ha transcurrido en su última etapa con relativa normalidad no obstante las denuncias de la oposición en el sentido de que existen serias irregularidades en el censo electoral, básicamente por una elevada omisión de posibles votantes liberales que no aparecen en los listados o se encuentran en lugares distintos a sus circunscripciones de origen, mediante el fácil expediente de los llamados «traslados de oficio» que se ha efectuado desde las oficinas centrales

del Registro Nacional de las Personas o del Tribunal Nacional de Elecciones, sin solicitud expresa del afectado. La preocupación principal estriba en que muchos simpatizantes no puedan ejercer el sufragio por no encontrarse en los listados de las localidades que le corresponden; al constituir una cantidad considerable, la no emisión de estos votos favorecería al Partido Nacional y podría constituir incluso la diferencia que marque un eventual triunfo del partido de gobierno.

Ante tal eventualidad, la oposición ha lanzado una campaña que convoca a votar utilizando únicamente la tarjeta de identidad, que cumple al mismo tiempo la función de carnet o tarjeta electoral, apoyándose en que es el documento básico que establece la Constitución de la República y dada la dificultad de efectuar a estas alturas correcciones de fondo que resultan plenamente confiables ante la ciudadanía. También se ha denunciado la inscripción ilegal de ciudadanos extranjeros de países vecinos, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, que podrían votar a favor del partido de gobierno; a lo que se suman las quejas de muchos ciudadanos hondureños que ni siquiera aparecen en ninguno de los listados electorales y que corren el riesgo de no poder ejercer su derecho ciudadano.

A pesar de estas irregularidades, el proceso electoral no se ha deslegitimado y en general recibe el respaldo de todas las fuerzas políticas y sociales del país. En el seno del Tribunal Nacional de Elecciones, en donde están representados todos los partidos políticos inscriptos, se vienen efectuando intensas sesiones de trabajo, deliberación y negociación, a fin de alcanzar acuerdos en torno a una mejor depuración y perfeccionamiento del censo electoral, que tranquilice y satisfaga a todas las partes. Para el mismo propósito se ha invitado a observadores extranjeros de la OEA, CAPEL y el Centro Carter, algunos de los cuales ya han empezado a brindar su concurso a fin de monitorear y apoyar la consecución de un proceso electoral limpio y transparente. Sin duda, a partir de estas experiencias, el país tendrá que realizar mayores esfuerzos de profesionalización y despartidización de los organismos electorales y de registro de las personas, a fin de convertirlos en entidades serias y confiables que respalden la estabilidad institucional.

Una innovación importante en el proceso electoral está constituida por la introducción, por primera vez en el país, del voto separado para presidente y alcaldes municipales, aunque dentro de la misma papeleta. Esto supone la posibilidad de poder votar por el candidato a presidente de un partido y por el candidato a alcalde de otro. Anteriormente se trataba de una única posibilidad, dado que bajo la imagen del candidato presidencial, se hacían «invisibles» los demás candidatos a cargos de elección popular, es decir, que el presidente «arrastraba» tras de sí el con-

junto de la fórmula o plancha electoral. Aunque significa un avance relativo, por lo menos permite una mejor opción ciudadana y abre las puertas para una mayor democratización de los procesos de escogencia y elección de candidatos.

El balance del ajuste

El proceso electoral no ha transcurrido en un vacío; el gran telón de fondo ha estado constituido por la marcha de la economía y fundamentalmente por las consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal de ajuste económico, implementado desde los inicios del presente gobierno en 1990 y cuyas repercusiones más contundentes se han sentido más fuertemente en los últimos meses, tanto desde el punto de vista del empresariado en general, como de los sectores populares y medios más afectados, particularmente en relación al empleo, el nivel de ingresos y la capacidad adquisitiva de la población.

En un reciente documento de PREALC/OIT, comparando 1992 en relación a 1989 se señala que «el deterioro de la calidad del empleo afectó principalmente al sector tradicional o informal. En 1989 este sector albergaba al 65,5% del total de subempleados por ingresos. Tres años después este porcentaje se había elevado al 73,9%, es decir, un crecimiento de casi 9 puntos porcentuales... Este comportamiento del subempleo corresponde bastante bien a la lógica del ajuste. Siendo una de las condiciones de éste la retracción de la demanda interna para, por esa vía, combatir la inflación; el mecanismo más sencillo para lograrlo (la retracción de la demanda) es contraer los salarios reales con el consiguiente aumento de la tasa de sub-empleo invisible» (PREALC, 5/1993).

En consecuencia, a pesar de las medidas modernizantes del ajuste económico, especialmente en relación al mercado de trabajo, dichos efectos han estado asociados a un deterioro de la calidad del empleo en el caso de buena parte de la población ocupada, lo que a su vez se ha traducido en un aumento de los niveles de pobreza. Las encuestas de hogares muestran que los parámetros de pobreza global se elevaron del 74,9% en 1989 al 78,4% en 1992, del total de las familias, tanto en el área urbana como en el área rural, donde el principal factor lo constituye la caída de los ingresos reales en la mayoría de las actividades económicas, lo que significa una severa pérdida de la capacidad adquisitiva de vastos sectores de población.

Sobre este aspecto, en un pronunciamiento reciente, el Colegio de Economistas establece que si bien en 1992 «la tasa de inflación se redujo a 8,8%, es necesario señalar que a lo largo de los 3 últimos años se ha registrado una pérdida del 51,5% en el

valor adquisitivo del lempira; pasando de L.0,41 en 1989 a L.0,23 en 1992, que es precisamente el costo de impresión de un billete. Lo anterior, como producto del efecto combinado del proceso devaluación-inflación-devaluación, durante el período 1990-1993». A nivel del costo de vida, esto se refleja en un desmedido aumento en los precios al consumidor de cerca del 80% en el período de 1990-1992, lo que anualmente representa un incremento promedio del 22%.

En términos de la dieta básica de la población (maíz, frijoles, arroz, aceites y mantecas, etc.) eso significa que el costo diario de la canasta mínima de alimentos para una familia de seis miembros se incrementó entre 1989 y 1993 (julio) de L. 14,60 a L. 29,00 al mes, lo que representa un alza del 100%. En esa misma línea el Colegio de Economistas, habla de que es más apropiado la utilización del término «desempleo oculto», para significar una combinación de desempleo abierto y de subempleo visible e invisible, que muestre más crudamente el nivel de deterioro real, que no es, ni más ni menos que una subutilización de la fuerza de trabajo que afecta a casi todas las fuentes de generación del ingreso, tanto asalariados como trabajadores por cuenta propia y microempresarios. Esto se manifiesta en una reducción del estrato de «no-pobres», que disminuyeron del 40% al 27% en los últimos tres años, lo que estaría indicando que también los grupos sociales medios de la población han sido afectados como consecuencia del impacto de las medidas del ajuste económico y que los programas de compensación han sido insuficientes para amortiguar este efecto.

El sector empresarial no ha dejado tampoco de externar sus apreciaciones críticas sobre la aplicación del modelo de ajuste. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), en un documento de evaluación sobre resultados del programa de ajuste estructural desde una perspectiva macroeconómica señalaba que «el comportamiento de los dos grandes sectores de actividad económica, como son el agropecuario y el industrial, no ha sido el más esperanzador... Entre las grandes limitantes que impidieron sobre todo que el sector industrial tuviera un papel más preponderante en la estructuración del Producto Interno Bruto, se pueden nombrar: la apertura de mercado, la desgravación arancelaria, la eliminación de los regímenes de exención, la liberalización de la tasa de interés, altos costos de energía y la menor disponibilidad de recursos crediticios en el sistema bancario nacional» (COHEP, septiembre 1993).

Precisamente en relación a las políticas crediticias y cambiarias los empresarios han hecho diversos cuestionamientos, al considerar que las medidas contraccionistas del modelo de ajuste recesivo, tornaron más aguda la crisis sobre todo en el sector

inversionista. Ante una brusca variación en el tipo de cambio que alcanzó un nivel sin precedentes de L. 7,80 por dólar, el Banco Central adoptó la decisión de aumentar la tasa de encaje legal sobre los depósitos en el sistema bancario en 7 puntos, elevándolo desde 35% a 42%; establecer metas de reducción del saldo del crédito neto del Banco Central al sector público hasta un nivel de 27,3 millones de lempiras al 31 de diciembre del presente año; reducir los plazos para el ingreso de divisas al país provenientes de las exportaciones y otras medidas adicionales.

Los efectos de dichas medidas no han resultado tan halagadores y sólo parcialmente propiciaron un mejoramiento de la estabilidad cambiaria, la que en realidad fue más influenciada por una mayor oferta de divisas de y hacia el sector privado. La política monetaria contractiva, que pretendía eliminar el exceso de liquidez existente en la economía, en cambio acentuó las tendencias recesivas de la inversión, al provocar una menor cuantía en la cartera de los bancos que condujo a un incremento en las tasas de interés sobre préstamos, al elevarse las mismas del 24% al 32%. Ello empeoró las condiciones de financiamiento en que operan los diversos sectores productivos del país, incidiendo en un menor dinamismo de la economía.

Demandas de la población y temas de la campaña

En este contexto, indudablemente el tema económico se convierte en uno de los principales ejes del debate electoral y de las preocupaciones de los votantes en términos de las ofertas programáticas que hacen los candidatos de uno y otro partido. En una encuesta reciente patrocinada por el Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos (CONAPRODEH), la Compañía Televisora Hondureña S.A., el COHEP y UNICEF, los hondureños manifiestan cuáles son sus principales problemas: corrupción (27,9%), inflación (16,7%), desempleo (14,7%), delincuencia (13,6%) y alimentación (11,5%). Para las mujeres el principal problema, después de la corrupción, es la inflación (19,5%); mientras que para los hombres lo es el desempleo (16,8%). En el caso de la juventud, el uso de las drogas es el principal problema de los hombres (54%), seguido por la falta de empleo (22%) y de oportunidades de estudio (10%); mientras tanto para las mujeres jóvenes el principal problema es la falta de empleo (28,3%), el que es seguido a continuación por las drogas (24,6%), la falta de oportunidades de estudio (21,8%) y el acoso sexual, que es mencionado más en la capital del país (22,8%).

Esta última percepción de las mujeres resulta sumamente congruente con los otros aspectos que se consideran también efectos de la crisis y de las medidas de ajuste, como es el caso del aumento de la violencia y de la delincuencia en general y parti-

cularmente de la violencia intrafamiliar, en relación a la cual los grupos organizados han demandado nuevas y más específicas medidas legislativas. Cuando se pregunta a las mujeres cuáles son sus principales problemas se mencionan los siguientes: discriminación (26,3%), maltrato (19,2%), bajos salarios (17,5%), falta de protección y escasa preocupación del gobierno por la situación de la mujer (9,4% y 7,8%, respectivamente).

Por otra parte también se menciona el abuso sexual contra las mujeres y se identifica que la mujer es víctima de algún grado de maltrato (63% las mujeres y 53% los hombres). Esto estaría indicando una mayor percepción de la mujer de su propia situación, desde una perspectiva de género, que coincide con mayores y más amplios niveles de organización y toma de conciencia, que incluso se han expresado en movilizaciones a favor de una correcta y equitativa aplicación de la justicia, de modificaciones importantes del Código Penal y de castigos más severos a los culpables de maltrato y violación. Una opinión similar se expresa en relación a la agresión física, emocional y sexual contra los niños; 55% de los entrevistados considera que en Honduras hay «mucho maltrato infantil», proporción que se eleva en las ciudades de Tegucigalpa (73,1%) y San Pedro Sula (69,7%).

Cabe señalar que a pesar de una variada percepción crítica de los consultados sobre problemas concretos de la vida nacional, existe un amplio consenso y respaldo al sistema electoral. La mayoría de ciudadanos (82%) manifiesta su decisión de votar en los próximos comicios, lo que es congruente con las tendencias de participación electoral y de abstención en los procesos electorales anteriores, aunque las encuestas de opinión reflejan a estas alturas un número relativamente alto de indecisos o que simplemente no simpatizan con ningún candidato de los actualmente inscritos. También es interesante que una de las principales razones para votar en las elecciones (41,4%), tanto para los hombres como para las mujeres, la constituye la tradición de partido, que también es congruente con la persistencia del bipartidismo en el sistema político hondureño.

El perfil de los candidatos

Las plataformas de los candidatos en la propaganda electoral recoge los grandes problemas antes mencionados: la corrupción, la inflación y el desempleo. El candidato del Partido Liberal, Carlos Roberto Reina, ha denominado su propuesta principal como «la revolución moral», orientada a combatir la corrupción en todos sus aspectos y a reestructurar el país en función de alcanzar un nivel adecuado de seguridad jurídica y derechos ciudadanos en la aplicación de la justicia y la vigencia

plena de las leyes. Como oposición hace una fuerte crítica a las consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal del ajuste económico y plantea la necesidad de un «gobierno con rostro humano», que considere plenamente las dimensiones relegadas del desarrollo social, dentro de la perspectiva de lo que se define como «liberalismo social».

El candidato del Partido Nacional Oswaldo Ramos Soto, ex-rector de la Universidad, considerado un político de amplia trayectoria conservadora, encuentra serias dificultades para distanciarse del actual programa de ajuste, capitalizando la crítica al actual gobierno, y al mismo tiempo asegurar que se mantendrán los lineamientos básicos del modelo, a fin de darle continuidad a la «obra modernizadora» del presidente Callejas, quien ha mantenido con habilidad y hasta el final de su mandato, un significativo liderazgo dentro de su partido y a nivel nacional, no obstante el desgaste político y los altos costos de la aplicación de las severas medidas económicas. Estas complicaciones para el candidato oficialista, quien además no ha logrado una sólida cohesión interna de su partido y un nivel adecuado de credibilidad a nivel nacional, lo han arrastrado hacia una agresiva campaña electoral de carácter confrontativo, que bien recuerda los mejores momentos de la era de la guerra fría.

El tono polémico y por momentos irrespetuoso de la campaña propagandística, a través de los medios de comunicación de masas, ha llevado a la Iglesia Católica y a otros sectores de opinión de la vida nacional a hacer constantes llamados de cordura en pos de la necesidad de mantener en alto la campaña electoral, evitando las alusiones y los ataques personales a los candidatos, y propiciando mas bien un tratamiento directo y responsable de los problemas y de las propuestas de solución que demandan los distintos sectores sociales.

Entre dichos temas, además de la corrupción, el alto costo de la vida y de la canasta básica de alimentos, la política agrícola y la seguridad alimentaria, la atención a la mujer, la juventud y la niñez, etc., ha saltado al primer plano el asunto relativo al nuevo rol de las fuerzas armadas en la post-guerra fría y en la era de pacificación de Centroamérica, y sobre todo el servicio militar obligatorio y los procedimientos de reclutamiento de los jóvenes. Unos plantean su total eliminación y otros una sustitución por un servicio voluntario y educativo, que genere oportunidades de calificación profesional. Pero el tema de fondo, aunque se menciona en voz baja, está referido en realidad a la supremacía castrense o a la subordinación militar al poder civil, tal como lo establece la Constitución de la República. Ello se relaciona también con el problema del desarme relativo y la disminución del gasto militar,

tantas veces mencionado por el enfoque de la ONU sobre Desarrollo humano, como parte de una reasignación de los recursos del presupuesto nacional en función de las prioridades del crecimiento económico y el desarrollo social sostenible.

La gravitación regional

Aunque no se ha tocado directamente, es indudable que las recientes crisis políticas de Guatemala y Nicaragua inciden en los términos y contenidos de la campaña electoral, en la medida que existe una interrelación geopolítica muy fuerte a nivel regional y dados los avances en los acuerdos parciales (C.A.-4) o globales sobre la reactivación de la integración centroamericana, la relación con el Grupo de los Tres, con los Estados de la Cuenca del Caribe y las posibles incidencias de la puesta en marcha del TLCAN.

Particularmente el resurgimiento de la crisis nicaragüense y la reaparición de los grupos armados (recompas y recontras), ha pretendido levantar la necesidad de un nuevo protagonismo militar que cumpla la función de detener el tráfico de armas, especialmente por territorio hondureño y brindar seguridad en las líneas fronterizas, a fin de evitar un reavivamiento más extendido de los conflictos político-militares del pasado, que den al traste con la estabilidad de la región y con la precaria institucionalidad democrática tan difícilmente conseguida a través de los intensos procesos de negociación y concertación, que dieron a Centroamérica una imagen de originalidad en el escenario internacional. Frente a estas debilidades, un «*eje democrático*» entre Costa Rica y Honduras, como los regímenes más consolidados desde el punto de vista del juego institucional, resulta importante en la medida en que puede coadyuvar a mantener un equilibrio político más sólido en el conjunto de la región y en los contextos más apropiados de cooperación internacional y neutralizando influencias desestabilizadoras provenientes de antiguos esquemas como los de la doctrina de seguridad nacional.

El desenlace de la contienda electoral puede significar la continuidad del régimen o un «*voto castigo*» que reabra las posibilidades de un cambio de rumbo en las orientaciones económicas, políticas y sociales gubernamentales. No obstante las encuestas, los pronósticos no pueden resultar definitivos; América Latina atraviesa un período turbulento de transición, que algunos han llamado un «*clima de posmodernidad*», cargado de incertidumbres, desencantos, temores, expectativas y sorpresas. Lo importante es que el proceso electoral y el conteo final de votos se desarrollen en las óptimas condiciones de pureza y transparencia que reafirmen el incipiente proceso de consolidación institucional y de emergente cultura política de-

mocrática. En todo caso, el nuevo gobierno, sin duda enfrentará retos y desafíos muy fuertes, en un contexto de restricción de recursos financieros, graves alteraciones ecológicas, problemas de narcotráfico, corrupción, etc., que deberán ser atacados seriamente si se quiere obtener condiciones de gobernabilidad democrática.

Tegucigalpa, septiembre de 1993